



Valledupar, Veinticuatro (24) de octubre del año dos mil Veintidós (2022).

Referencia: ACCION DE TUTELA.

Accionante: NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ

Accionado: BANCO COLPATRIA Y BANCO DE BOGOTA

Rad. 20001-41-89-002-2022-00703-00

Providencia: FALLO DE TUTELA

Procede el Juzgado a dictar el fallo correspondiente en la acción de tutela referenciada. En la cual se relacionan los siguientes:

I. HECHOS:¹

1. EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA y NOHORA PAULINA MARULANDA con fecha 27 de julio de 1957, por los ritos de la religión católica en la Parroquia de San Juan Bautista en la ciudad de San Juan del Cesar (Guajira), contrajeron matrimonio el cual fue registrado en la Registraduría del Estado Civil de San Juan del Cesar (Guajira) bajo el serial # 4229069 del Registro Civil de Matrimonio.

2. Entre los cónyuges EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA y NOHORA PAULINA MARULANDA no celebraron antes de contraer matrimonio capitulaciones matrimoniales (Art. 1771 C. C.).

3. Por ordenamiento legal a falta de constitución de patrimonio de familia entre los cónyuges EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA y NOHORA PAULINA MARULANDA, por el mero hecho de la celebración del matrimonio se configuró la sociedad conyugal (Art. 1774 C. C.).

4. El haber de la sociedad conyugal se conforma o integran todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso (Art. 1781 C.C.).

5. Mediante la escritura pública #3021 de fecha 26 de septiembre del 2012 diligenciada ante la notaria Primera de Valledupar los cónyuges EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA y NOHORA PAULINA MARULANDA de común acuerdo decidieron disolver y liquidar la sociedad conyugal conformada entre ellos, relacionando en la misma los bienes que hicieron parte de la citada partición.

6. A pesar de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal conformada por los cónyuges EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA y NOHORA PAULINA MARULANDA plasmada en la escritura pública #3021 de fecha 26 de septiembre del 2012 diligenciada ante la notaria Primera de Valledupar, es su propósito hacerse parte dentro de la sucesión de su cónyuge EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA con el objeto de que se le reconozca, si hubiese lugar a ello, a los gananciales que como cónyuge le corresponde, sobre aquellos bienes, obtenidos durante la vigencia de la sociedad conyugal y que no fueron tenidos en cuenta al momento de disolver y liquidar la sociedad, recibiendo estos, con beneficio de inventario (Art. 1781 del C.C.).

7. EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA fallece el doce (12) de mayo del 2020.

8. NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ tiene la calidad de cónyuge supérstite del señor EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA quien falleció en Valledupar el día doce (12) de mayo del 2020, quien en vida se identificó con la C. de C. # 1'764.379 de San Juan del Cesar (Guajira),.

9. El Juzgado Primero de Familia de Valledupar mediante providencia de fecha tres (3) de marzo del 2022 reconoce a NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ como cónyuge supérstite dentro del proceso de la referencia.

10. NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ en su calidad de cónyuge supérstite y teniendo conocimiento que su esposo EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA fue cliente de las citadas entidades bancarias solicitó, mediante derecho de petición: “se sirvan certificarme si el señor EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA, quien en vida se identificó con la C. de C. # 1'764.379 tenía cuanta de ahorro, cuenta corriente o dineros depositados a término fijo, en caso afirmativo, sírvanse identificar el nombre del producto, el número del producto y la cuantía del producto, teniendo como fecha límite el día veintiséis (26) de septiembre del año dos mil doce (2012), es decir, si para la fecha señalada tenía los citados productos...”; petición que se les hizo entrega físicamente al BANCO COLPATRIA y al BANCO DE BOGOTA el 13 de julio del 2022 (Anexo los documentos enunciados con nota de recibido).

¹ Texto tomado taxativamente de la acción de tutela



11. Hasta la fecha los BANCOS COLPATRIA Y BOGOTA no se han dignado dar respuesta al derecho de petición señalado.

12. Por otro lado, es preciso recordar los términos establecidos para la respuesta de los derechos de petición consagrados en la ley 1437 de 2011 en su artículo 14:

ARTÍCULO 14. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

13. Por último, es necesario tener en cuenta el artículo 31 de la ley 1437 de 2011 en cuanto a la adecuada respuesta que deben tener los derechos de petición: ARTÍCULO 31. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código; constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.

14. REPITO, HASTA EL DIA DE HOY LOS BANCOS COLPATRIA Y DE BOGOTA NO SE HA DIGNADO DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EFECTUADO.

15. Vale la pena advertir que tales entidades bancarias incurren en una conducta grosera y abusan de su posición dominante cuando ignora por completo la petición efectuada. 1.16. La señora NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ me ha conferido poder para que la represente en el caso que nos ocupa.

II. ACTUACIÓN PROCESAL:

Por venir en forma legal la demanda de tutela fue admitida mediante auto de fecha once (11) de octubre de Dos mil Veintidós (2022), notificándose a las partes sobre su admisión, y solicitando respuesta de los hechos presentados por el accionante a la parte accionada.

III. CONTESTACION DE LA PARTE²

La parte accionada **BANCO COLPATRIA** contesto la presente demanda de la siguiente manera:

Manifestó que procedió a remitir respuesta el día de 11 de octubre de 2022 y que dicha comunicación fue recibida por la accionante como lo corrobora la constancia de envío de la comunicación a través del correo electrónico institucional, así mismo remitieron por este medio la presente respuesta en archivo PDF.

Expresaron que la respuesta emitida por parte de la entidad cumple con los requisitos que la Jurisprudencia y la doctrina han señalado para el alcance del derecho de petición, tal como lo ha precisado la H. Corte Constitucional entre otras en Sentencia T- 149 de 2013

La parte accionada **BANCO DE BOGOTA** quien fue debidamente notificada de la presente acción de tutela no contesto.

IV. PRETENSIONES:³

PRIMERO. Tutelar el DERECHO DE PETICION (art. 23 C. N.), conforme a nuestro Estado Social de Derecho.

SEGUNDO. Consecuencialmente, se sirva ordenar a los BACOS COLPATRIA y BANCO DE BOGOTA por intermedio de sus gerentes, que en el término de 48 horas se sirva dar respuesta al derecho de petición enunciado y presentado por mi representada en escritos recibidos por esas entidades bancarias el día trece (13) de julio del 2022.

V. DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO:

El accionante considera que, con los anteriores hechos se está vulnerando su derecho fundamental de petición.

² Texto tomado taxativamente de las pretensiones de la acción de tutela



VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

La Constitución de 1991 consagró, en el artículo 86, la acción de tutela como un mecanismo creado para la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas que por alguna acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, son amenazados o, de hecho, vulnerados.

6.1. Competencia del Juez para la resolución del presente conflicto jurídico - constitucional:

Además de las normas citadas en el encabezamiento de esta providencia acerca de la facultad en cabeza de los Jueces de la República para conocer de este tipo de conflicto jurídico-constitucional, el Decreto 1382 de 2000, estableció las reglas para el reparto de la Acción de Tutela. Al manifestar la Corte Constitucional que todos los jueces son competentes para conocer de Tutelas, este Despacho es competente para conocer de ella, en consecuencia, entrará a estudiar si en efecto se han vulnerado los derechos cuya protección reclama la accionante.

6.2. Legitimación por activa. Conforme al artículo 86 de la Carta, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular. Por su parte, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela. La norma en cita establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: i) a nombre propio; ii) a través de representante legal; iii) por medio de apoderado judicial; o iv) mediante agente oficioso.

En el caso objeto de estudio, se acredita que la señora NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ quien es la persona directamente afectada interpuso la presente acción a través de apoderado judicial el DR. OSCAR ARMANDO ARGOTE ROYERO ante la presunta vulneración de su derecho fundamental al derecho al debido, por lo que se en conjunto estas dos circunstancias hacen concluir que el requisito de legitimación por activa se encuentra satisfecho de buena manera.

6.3. Legitimación por pasiva. La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en el proceso. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y contra particulares.

En el asunto de la referencia, la acción de tutela se dirige contra BANCO COLPATRIA Y BANCO DE BOGOTÁ, a la cual se le atribuye la vulneración de su derecho fundamental de petición, lo cual deriva en ostentar la capacidad para ser sujeto pasivo de la presente acción constitucional.

6.4. Regulación legal del derecho de petición.

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja.

A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una Resolución determinada, sí exige que exista un pronunciamiento oportuno.

Cuando se hace una petición a las entidades públicas o privadas y estas no la responden dentro del término legalmente establecido en la norma, es motivo para instar a la entidad a dar solución inmediata a la petición, a través de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de nuestra Carta Política, siendo esta un instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con la cual se puede obtener la protección específica e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en aquellos casos autorizados por la Ley.



A si las cosas, tenemos que, de las circunstancias obrantes en el expediente, se puede colegir que el accionante pretende se tutele en su favor por violación al derecho de petición, regulado por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta que la accionada dio respuesta oportuna a su petición.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición al igual que los demás derechos constitucionales no tienen “per se” el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites previstos por los derechos de los demás y el orden jurídico.

Es un deber de todo ciudadano respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios, son principios intrínsecos que van inmersos en el actuar de todos los ciudadanos colombianos, pero en especial de los funcionarios públicos.

En términos generales, puede decirse que el derecho de petición, se establece legal y constitucionalmente a favor de todas las personas. Cabe resaltar que, para la efectividad del mismo, quien hace uso de este medio, debe cumplir además de las exigencias establecidas en la norma que le da vida jurídica al mismo, la Constitución Política de Colombia, con los requisitos formales establecidos en la ley 1755 de 2015.

Por tanto, tenemos en primer lugar, como característica primordial que la petición debe ser respetuosa, puesto que si no lo fuere y se incumple con este requisito se exime de la obligación de responder a quien se invoca, por incumplimiento de las condiciones del artículo 23 de la Constitución Política.

En segundo lugar, el derecho de petición puede ser: por interés general, por interés particular, por petición de informaciones, o por consultas.

Cuando se trata de información, esta debe ser veraz e imparcial e inalterada, y puede ser general: acceso a documentos sobre el origen, estructura, funcionamiento, naturaleza, procedimientos etc. y particular: información que se produzca por el ejercicio de sus funciones o que repose en la entidad, exceptuándose el caso de los documentos sometidos a reserva por disposición de la ley o la Constitución Nacional.

Adicionalmente a lo anterior, tenemos que en los apartes de la norma citada se establece los términos en que deben resolverse las peticiones, las cuales serán atendidas de la siguiente manera:

“Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

6.5. PROBLEMA JURIDICO

Corresponde al Juzgado determinar si la accionada BANCO COLPATRIA Y BANCO DE BOGOTA ha vulnerado el Derecho Fundamental de petición del señor NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ.



6.3. CASO EN CONCRETO.

Descendiendo al sub exánime, se tiene que el accionante NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ, presento derecho de petición el día 13 de julio de 2022, ante BANCO COLPATRIA y BANCO DE BOGOTA solicitando lo siguiente:

“con todo respeto me permito solicitarles se sirvan certificarme si el señor EFRAIN DARIO FERNANDEZ DAZA, quien en vida se identificó con la CC 1.764.379 tenía cuenta de ahorro, cuenta corriente o dineros depositados a término fijo, en caso afirmativo sírvanse identificar el nombre del producto, el número del producto y la cuantía del producto, teniendo como fecha limite el día veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012), es decir, si para la fecha señalada tenía los citados productos ”

En consecuencia, le corrió traslado a las entidades accionadas, que por un lado el BANCO COLPATRIA, manifestó haber dado respuesta ala petición del accionante mediante comunicación de 13 de octubre de 2022, la cual fue notificada al correo electrónico aportado por el peticionario.

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C- 418 de 2017 reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación:

- “1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.*
- 2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.*
- 3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.*
- 4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita. (...).”*

Para el caso en concreto, el despacho observa que la respuesta dada por la entidad accionada al señor NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, es decir resolviendo de fondo la solicitud efectuada por el actor.

Lo que demuestra que, durante el trámite de la presente acción, la accionada hizo cesar las causas que dieron origen a la presente demanda de tutela, al dar una respuesta, clara, congruente y de fondo a lo solicitado por el peticionario, según los documentos anexado en la contestación de la presente acción constitucional. Respecto a la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia T- 021 del 20 de febrero de 2017, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, y ha señalado que esta se presenta en la acción de tutela cuando frente a la solicitud de amparo del actor, la orden del Juez de tutela carece de efectos, precisando que la misma acontece cuando se está ante un daño consumado o ante un hecho superado.

En esa sentencia textualmente dijo el máximo tribunal constitucional:

“La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o caería en el vacío Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.

En cuanto al daño consumado, la jurisprudencia ha admitido que el mismo tiene ocurrencia cuando la amenaza o la transgresión del derecho fundamental ya ha generado el perjuicio que se pretendía evitar con el mecanismo preferente de la tutela, de manera que resulta inocuo para el juez impartir una orden en cualquier sentido. Así las cosas, el daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete un peligro y, por ello, tan sólo es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho. En este escenario, esto es, con el fin de obtener una reparación económica, entiende la Corte que la acción de tutela



resulta—por regla general— improcedente, pues su naturaleza es eminentemente preventiva y no indemnizatoria. De manera que, en relación con este fenómeno, los jueces de instancia y la propia Corte deben declarar la improcedencia de la acción, a menos que —bajo ciertas circunstancias— se imponga la necesidad de pronunciarse de fondo por la proyección que pueda tener un asunto, en virtud de lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, o por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial protección constitucional.

Por su parte, el hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional.

En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”.

Precisamente, en la Sentencia T-045 de 2008, se establecieron los siguientes criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de uno de tales hechos, a saber:

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”

Vistas las anteriores consideraciones, es evidente que en el asunto en estudio se presente la carencia actual de objeto por hecho superado con respecto de la entidad accionada BANCO COLPATRIA, ya que la entidad accionada, dio respuesta al derecho de petición presentado por el accionante el día trece (13) de octubre de 2022 el cual fue debidamente notificado al actor, de ahí que la acción de tutela pierda su razón de ser en este caso concreto, pues la orden que pudiera impartir el juez de tutela no tendría ningún efecto práctico al haberse superado la situación de hecho que produjo que la tutelante, incoara el resguardo constitucional, es decir, el motivo que generó la acción ya desapareció.

Por otro lado, la entidad accionada BANCO DE BOGOTA, a quien se le corrió traslado de la presente acción constitucional a la entidad accionada la cual guardó silencio, omitiendo flagrantemente el deber que le asiste no solo de atender y acatar las decisiones y requerimientos de las autoridades judiciales, sino además de resolver en oportunidad, eficiencia e inmediatez al usuario sus peticiones

En ese sentido, atendiendo al desinterés de la entidad accionada BANCO DE BOGOTA, en atender el requerimiento previo del Despacho, se dará aplicación a la presunción de veracidad, contemplada en el Decreto 2591, en su artículo 20, el cual al tenor de la letra dice:

“ARTICULO 20.-Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.”



La entidad accionada BANCO DE BOGOTA esta conminada atender el requerimiento elevado por el hoy accionante conforme a su competencia y resolver de fondo la misma, sin dilaciones injustificadas conculcando los derechos que le asiste a la tutelante.

Así las cosas, se ordenará a la entidad BANCO DE BOGOTA en el término de (48) horas seguidas a la notificación de esta providencia se sirva dar respuesta clara y de fondo al derecho de petición de fecha trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) presentado por la señora NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ y proceder a dar una solución definitiva conforme a su competencia, sin más dilaciones injustificadas.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Segundo De Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER la tutela instaurada por **NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ**, contra BANCO DE BOGOTA por la vulneración a su derecho fundamental de petición.

SEGUNDO: DESVINCULAR de la presente acción de tutela a la entidad accionada BANCO COLPATRIA, por ser un hecho superado.

TERCERO: ORDENAR a la entidad accionada BANCO DE BOGOTA en el término de (48) horas seguidas a la notificación de esta providencia se sirva dar respuesta clara y de fondo al derecho de petición de fecha trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) presentado por la señora NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ.

CUARTO: Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama).

QUINTO: En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

El Juez,


JOSSUE ABDON SIERRA GARCES
JUEZ



Valledupar, Veinticuatro (24) de octubre del año dos mil Veintidós (2022).

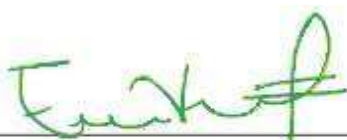
Oficio No. 3562

Señor(a):
NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ
Dirección de correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.
Accionante: NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ
Accionado: BANCO COLPATRIA Y BANCO DE BOGOTA
Rad. 20001-41-89-002-2022-00703-00
Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICO FALLO DE TUTELA DE FECHA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE: **PRIMERO: CONCEDER** la tutela instaurada por **NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ**, contra BANCO DE BOGOTA por la vulneración a su derecho fundamental de petición. **SEGUNDO: DESVINCULAR** de la presente acción de tutela a la entidad accionada BANCO COLPATRIA, por ser un hecho superado. **TERCERO: ORDENAR** a la entidad accionada BANCO DE BOGOTA en el término de (48) horas seguidas a la notificación de esta providencia se sirva dar respuesta clara y de fondo al derecho de petición de fecha trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) presentado por la señora NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ. **CUARTO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **QUINTO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. . NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez (*fdo*) JOSSUE ABDON SIERRA GARCES.

Atentamente,


ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria



Valledupar, Veinticuatro (24) de octubre del año dos mil Veintidós (2022).

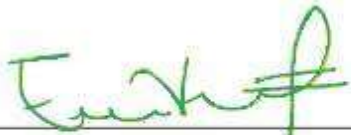
Oficio No. 3563

Señor(a):
BANCO COLPATRIA
Dirección de correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.
Accionante: NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ
Accionado: BANCO COLPATRIA Y BANCO DE BOGOTA
Rad. 20001-41-89-002-2022-00703-00
Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICO FALLO DE TUTELA DE FECHA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE: **PRIMERO: CONCEDER** la tutela instaurada por **NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ**, contra BANCO DE BOGOTA por la vulneración a su derecho fundamental de petición. **SEGUNDO: DESVINCULAR** de la presente acción de tutela a la entidad accionada BANCO COLPATRIA, por ser un hecho superado. **TERCERO: ORDENAR** a la entidad accionada BANCO DE BOGOTA en el término de (48) horas seguidas a la notificación de esta providencia se sirva dar respuesta clara y de fondo al derecho de petición de fecha trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) presentado por la señora NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ. **CUARTO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **QUINTO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. . NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez (*fdo*) JOSSUE ABDON SIERRA GARCES.

Atentamente,


ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria



Valledupar, Veinticuatro (24) de octubre del año dos mil Veintidós (2022).

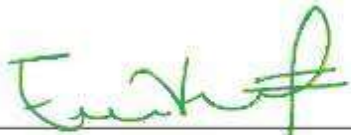
Oficio No. 3564

Señor(a):
BANCO DE BOGOTA
Dirección de correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.
Accionante: NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ
Accionado: BANCO COLPATRIA Y BANCO DE BOGOTA
Rad. 20001-41-89-002-2022-00703-00
Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICO FALLO DE TUTELA DE FECHA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE: **PRIMERO: CONCEDER** la tutela instaurada por **NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ**, contra BANCO DE BOGOTA por la vulneración a su derecho fundamental de petición. **SEGUNDO: DESVINCULAR** de la presente acción de tutela a la entidad accionada BANCO COLPATRIA, por ser un hecho superado. **TERCERO: ORDENAR** a la entidad accionada BANCO DE BOGOTA en el término de (48) horas seguidas a la notificación de esta providencia se sirva dar respuesta clara y de fondo al derecho de petición de fecha trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) presentado por la señora NOHORA PAULINA MARULANDA DE FERNANDEZ. **CUARTO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **QUINTO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. . NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez (*fdo*) JOSSUE ABDON SIERRA GARCES.

Atentamente,


ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria